



-000033-

Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Guatemala, 24 de noviembre del 2005
Ref no. CG 545-2005

Licenciado
Luis Eduardo López Ramos
Director Legislativo
Congreso de la República
Su Despacho

Distinguido Señor Director:

En esta oportunidad me dirijo a usted, deseándole éxitos al frente de sus funciones.

Por este medio, tenemos el agrado de enviar adjunto el **DICTAMEN FAVORABLE CON ENMIENDAS** a la Iniciativa de Ley para Combatir el Crimen Organizado y la Delincuencia Común, con Registro 3288; emitido por la Comisión de Gobernación, para que sea conocido por el Honorable Pleno del Congreso de la República.

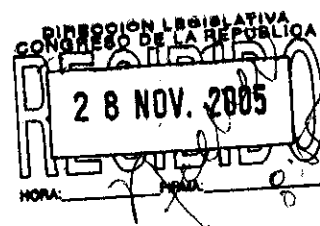
Sin otro particular, es grato suscribirnos con muestras de consideración y estima.

Cordialmente,

DIPUTADO SERGIO ARNOLDO CAMARGO MURALLES
PRESIDENTE
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN



c.c. Archivo
Adjunto diskette
ee





-000034-

Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

CONGRESO DE LA REPUBLICA
COMISION DE GOBERNACION

DICTAMEN

HONORABLE PLENO:

Con fecha dos de agosto del dos mil cinco, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la Comisión de Gobernación del Congreso de la República, para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Ley identificada con el número de registro tres mil doscientos ochenta y ocho (3288) de Dirección Legislativa, presentada por los representantes SERGIO ARNOLDO CAMARGO MURALLES y OLIVERIO GARCIA RODAS, que dispone aprobar la Ley para Combatir la Delincuencia Organizada, para que se pronuncie sobre su importancia y conveniencia.

CONSIDERACIONES:

La delincuencia organizada constituye una de las actividades ilegales más complejas y extensas, su forma de operación infringiendo el orden legal vigente daña en dimensiones incalculables el estado de derecho, penetra en las instituciones particulares y del Estado, y quebranta la confianza de la sociedad hacia ellas, corrompe nuestra juventud, la sociedad, desintegra familias, afecta y genera distorsión en la economía de nuestros países, implanta cultura de terror y corrupción. La comunidad internacional percibe hoy el fenómeno del crimen organizado como una amenaza global.

La corrupción, la acumulación de dinero por medios ilícitos no son hechos recientes, sin embargo la prosperidad de las redes de criminales en particular de los narcotraficantes ha aumentado en dimensión en estos últimos años. En poco tiempo, sobre todo por el incremento en el tráfico de drogas y por los beneficios económicos que estos producen, el poder de las organizaciones criminales va a llegar a competir con ciertos Estados. Los tráfico ilícitos son un elemento significativo del comercio internacional. Las sumas en juego perturban los círculos económicos, corrompen los aparatos del poder público y representan un peligro real para la estabilidad de las democracias.

Estas organizaciones criminales penetran el seno de nuestras sociedades, se burlan de las fronteras, aprovechan todos los recursos modernos como transportes, telecomunicaciones, tecnologías avanzadas y utilizan los mercados internacionales hoy

44



-000035-

Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

globalizados, para llevar adelante sus negocios. Sacan ventaja del principio de soberanía nacional, de la ineficiente coordinación de las fuerzas públicas involucradas, de las debilidades y heterogeneidades de nuestros ordenes jurídicos. Frente a estas fallas los movimientos nacionales, la concientización internacional y las cooperaciones multi y bilaterales, son armas que debemos utilizar.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA:

Esta ley tiene por objeto regular mecanismos de investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por algún miembro de grupos delictivos organizados.

Para permitir lo anterior la ley contempla los siguientes métodos:

1. Operaciones encubiertas, las cuales estarán debidamente reguladas y corresponderá al Fiscal General de la Nación y Jefe del Ministerio Público autorizar o no este tipo de operaciones a solicitud de agentes fiscales del Ministerio Público en casos determinados.
2. Entregas vigiladas: Durante el desarrollo de operaciones encubiertas el Fiscal General de la Nación y Jefe del Ministerio Público a requerimiento del agente fiscal del Ministerio Público encargado del caso podrá autorizar que agentes encubiertos pongan a circular dentro de organizaciones criminales y otras conexas, drogas o estupefacientes así como otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilícito comercio, a efecto de descubrir el funcionamiento y operación de dichas organizaciones y obtener la demás información que se persigue mediante la utilización de las entregas vigiladas.
3. Intercepciones telefónicas y otros medios de comunicación: Cuando sea necesario evitar, interrumpir o investigar la comisión de delitos cometidos por grupos delictivos organizados, podrá interceptarse, gravarse y reproducirse, con autorización judicial, comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético, así como cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro existan.

Así mismo la tipificación del delito de conspiración en aquellos actos ilícitos de grave impacto social.

[Firma]

[Firma]
[Firma]



-000036-

Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

CONCLUSION:

Que conforme las facultades que le confiere la Constitución Política de la República, es función del Honorable Congreso de la República conocer el relacionado proyecto de ley por lo que esta Comisión de Gobernación al considerar que la iniciativa presentada se encuentra basada en ley, emite **DICTAMEN FAVORABLE CON ENMIENDAS**, adjuntándose el respectivo proyecto de Decreto, para que el honorable pleno decida sobre el mismo.

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN EN LA CASA DE LA CULTURA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CINCO.

Diputado Sergio Arnaldo Camargo Muralles
Presidente de la Comisión

Diputado Armando Paniagua Rodríguez
Vicepresidente

Diputado Luis Velásquez Cerdas
Secretario

Diputado Carlos Velásquez Pérez

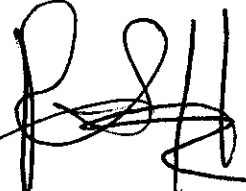
Diputado Leopoldo Cruz Clavería




-000037-

Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

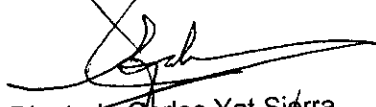

Diputado Marvin García Buenafé

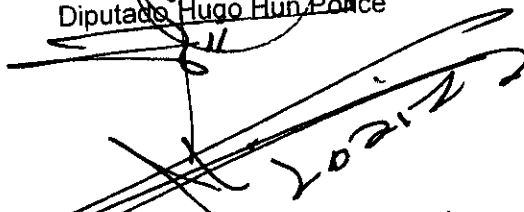

Diputado Eduardo Zachrisson Castillo

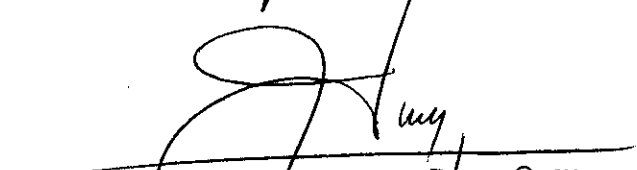

Diputado Víctor Manuel Escobar


Diputada Virginia Leona López Chacón

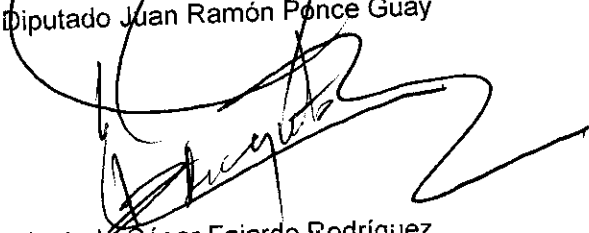

Diputado Hugo Hun Ponce


Diputado Carlos Yat Sierra



Diputado Héctor Loaiza Gramajo

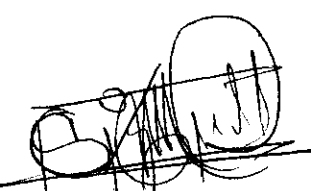

Diputado Juan Ramón Ponce Guay


Diputado Ángel Mario Salazar Mirón


Diputado César Fajardo Rodríguez


Diputado Manuel de Jesús Castillo Medrano


Diputado Pablo Duarte





-000038-

Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Diputado Pablo Monsanto

Diputado Juan Santa Cruz Cú

Diputado Otto Pérez Molina

Diputado Marco Antonio Solares Pérez



-000039-

Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

INICIATIVA DE LEY PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
EXPOSICION DE MOTIVOS

La delincuencia organizada constituye una de las actividades ilegales más complejas y extensas, su forma de operación infringiendo el orden legal vigente daña en dimensiones incalculables el estado de derecho, penetra en las instituciones del estado y quebranta la confianza de la sociedad hacia ellas, corrompe nuestra juventud, nuestra sociedad, desintegra familias, afecta y genera distorsión en la economía de nuestro país e implanta culturas de temor, terror y corrupción.

A través de los años, este fenómeno ha adquirido una gran magnitud y se ha ido enraizando paso a paso en nuestro territorio y sociedad, si a eso le sumamos el proceso lento de actualización de los estados nacionales para ir enfrentando esa clase de fenómenos, su efecto es demoledor, por lo que se hace importante hacer evoluciones en los recursos legales existentes para combatir este fenómeno.

Hay conciencia que el deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana se debe a diferentes factores pero, paradójicamente, la evolución y modernización del Estado de Guatemala en cuanto infraestructura y servicios, ha sido aprovechada por el crimen organizado para desarrollar sus operaciones; así como el lento desarrollo humano, social y económico que les da la oportunidad de penetrar en los diferentes estratos de la sociedad.

El fenómeno de la delincuencia organizada, como se ha descrito anteriormente afecta a la sociedad y pone en riesgo los avances y fortalecimiento de las instituciones del Estado, eso mismo exige al Estado tomar acciones decididas y hacer los enfoques diferentes, para implementar normas legales que permitan facilitar y respaldar las acciones de las diferentes instituciones del Estado, mediante la creación de figuras legales que permitan la utilización de métodos adecuados, que basados en el estado de derecho, proporcionen los procedimientos eficaces para la investigación y persecución de esta clase de delincuencia organizada.

Por lo expuesto anteriormente, me permito proponer la siguiente iniciativa que busca legislar para dar las normas e instrumentos legales para enfrentarla.

El proyecto de ley es el siguiente:



-000040-

Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

DECRETO NÚMERO ____

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; siendo su fin supremo la realización del bien común.

CONSIDERANDO

Que la delincuencia organizada es un flagelo que actualmente ha colocado a los habitantes de la República en un estado de indefensión, por su funcionamiento organizacional, lo que hace necesario la creación de un instrumento legal para perseguir, procesar y erradicar a la delincuencia organizada.

CONSIDERANDO

Que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita por Guatemala con fecha 12 de diciembre de 2000 y aprobada mediante el Decreto 36-2003, tiene como propósito promover la cooperación para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional, comprometiéndose el Estado de Guatemala a adoptar las medidas legislativas correspondientes a efecto de combatir y erradicar la delincuencia organizada, estableciéndose mecanismos especiales de investigación.

POR TANTO

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171, inciso a), de la Constitución Política de la República de Guatemala,



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

DECRETA

La siguiente:

**LEY PARA COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA DELINCUENCIA
COMUN**

**TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO PRIMERO
OBJETO, NATURALEZA Y AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY**

Artículo 1. Objeto y naturaleza. La presente Ley tiene por objeto regular mecanismos de investigación, persecución y sanción, de los delitos cometidos por algún miembro de grupos delictivos organizados. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional.

**CAPÍTULO SEGUNDO
DEFINICIÓN**

Artículo 2. Grupo delictivo organizado u organización criminal. Para efectos de la presente Ley se considera grupo delictivo organizado u organización criminal, cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para cometer, en forma permanente o reiterada, los siguientes delitos: , transito internacional, fabricación o transformación, comercio, trafico y almacenamiento ilícito, transacciones e inversiones ilícitas, siembra y cultivo, promoción y fomento, facilitación de medios, asociaciones delictivas y procuración de impunidad o evasión contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad; peculado, concusión, fraude, colusión y prevaricación cometidos por empleados o funcionarios públicos; asesinato, secuestro, robo agravado, trata de personas, lavado de dinero u otros activos; genocidio, desaparición forzada de personas, ejecución extrajudicial, delitos de lesa humanidad según los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Guatemala, con el fin de obtener un beneficio económico u otro beneficio de carácter material.



Comisión de Gobernación

Congreso de la República

Guatemala, C. A.

CAPÍTULO TERCERO **De los Delitos del Crimen Organizado**

Artículo 3. Conspiración. Hay delito de conspiración, cuando dos o más personas se conciertan para cometer los actos y delitos enumerados a continuación y serán sancionados con prisión de seis a ocho años, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos.

1. Sembrar, cultivar, producir, refinar, comercializar, vender, traficar, transportar, retener, distribuir, almacenar, importar, exportar, recibir o entregar drogas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o productos derivados de las mismas o destinados para su preparación, así como cualquier otra actividad ilícita relacionada con la narcoactividad.
2. Delitos migratorios.
3. Fraude Bancario.
4. Robo Bancario.
5. Quiebra fraudulenta.
6. Falsificación de moneda.
7. Extorsión, amenazas o secuestro.
8. Traslado oculto de dinero.
9. Lavado de activos.
10. Hurto, robo de vehículos.
11. Comercialización de artículos robados.
12. Estafa.
13. Delitos contra la humanidad y la integridad moral.

Artículo 4. Asociación Ilícita. Comete el delito de Asociación Ilícita, quien integre asociaciones del siguiente tipo:

1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión.
2. Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.
3. Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución.
4. Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello.



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Este delito será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos.

Artículo 5. Asociación ilegal de gente armada. Comete el delito de asociación ilegal de gente armada, quien organice, promueva o pertenezca a grupos o asociaciones no autorizadas, para el uso, entrenamiento o equipamiento con armas. Este delito será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión.

Artículo 6. Entrenamiento para actividades ilícitas. Comete el delito de entrenamiento para actividades ilícitas, quien equipe, organice, instruya o entrene a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares o policiales, para el desarrollo de actividades terroristas, escuadrones de la muerte, grupos de justicia privados, bandas de sicarios o destinadas a ejecutar acciones de crimen organizado. Este delito será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión.

Artículo 7. Uso ilegítimo de uniformes o insignias. Comete el delito de uso ilegítimo de uniformes o insignias, quien con animo de cometer un delito use, exhiba, porte o se identifique con prendas, uniformes o insignias reales, similares o semejantes a los del ejército, policía, o fuerzas de seguridad del Estado. Este delito será sancionado con pena de tres a cinco años de prisión.

Artículo 8. Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero. Comete el delito de comercialización de vehículos robados en el extranjero, quien a sabiendas, de cualquier forma autorice el ingreso al país, venda o comercialice vehículos naves, aeronaves o maquinaria que hayan sido robados en el extranjero. Este delito será sancionado con pena de dos a cinco años de prisión y comiso de los vehículos, naves, aeronaves y maquinaria.

Artículo 9. Comercialización de productos provenientes de delitos. Comete el delito de comercialización de productos provenientes de delitos, quien a sabiendas, adquiera, convierta, transfiera o de cualquier forma comercialice bienes que provengan de la comisión de delitos, delitos cometidos por asociaciones delictivas o criminales. Este delito será sancionado con pena de dos a cinco años de prisión.



Comisión de Gobernación

Congreso de la República

Guatemala, C. A.

CAPITULO CUARTO AGRAVANTES ESPECIALES Y PENA ACCESORIA

Artículo 11. Para la imposición de las penas previstas en el Código Penal por la comisión de cualquiera de los delitos en que incurran los miembros de grupos delictivos organizados, deberán observarse las siguientes reglas.

- a. A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión dentro del grupo delictivo organizado, se le aumentará la pena en una tercera parte.
- b. Si el miembro del grupo delictivo organizado fuere funcionario o empleado público se le aumentará la pena en una tercera parte; y se le impondrá la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el doble del tiempo de la prisión; o si fuere sancionado con multa, por el plazo de cinco años.
- c. Si los miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a menores de edad para cometer las actividades delictivas, se les aumentará la pena en una tercera parte.
- d. Si los miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a personas valiéndose de relaciones de poder ejercidas sobre éstas, se aumentará la pena en una tercera parte.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS MEDIOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS Y DE LOS DELITOS DE GRAVE IMPACTO SOCIAL

CAPÍTULO PRIMERO

REGLAS GENERALES

Artículo 12. Plazos. Los plazos para la investigación de delitos cometidos por grupos delictivos organizados se regirán por el Código Procesal Penal; siempre que exista auto de procesamiento. Mientras no exista auto de procesamiento contra alguna persona, podrán desarrollarse los actos de investigación



Comisión de Gobernación

Congreso de la República

Guatemala, C. A.

previstos en la presente Ley con control judicial, pudiendo durar la investigación hasta antes que el delito investigado prescriba conforme el Código Penal.

Artículo 13. Deber de colaborar. La Superintendencia de Bancos, la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles, el Registro de la Propiedad Inmueble, el Registro Mercantil, el Registro de Marcas y Patentes, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Intendencia de Verificación Especial, y cualquiera otra entidad pública, deberá prestar su colaboración cuando le sean requeridos informes para la investigación de los delitos objeto de la presente Ley. El funcionario o empleado público que por negligencia o resistencia incumpliere con las solicitudes planteadas por el Ministerio Público o retardare injustificadamente los actos que le sean requeridos, será responsable del delito de incumplimiento de deberes; sin perjuicio de las responsabilidades civiles y administrativas en que incurra.

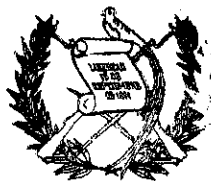
Artículo 14. Confidencialidad. La información que se obtenga conforme al artículo anterior, podrá ser utilizada exclusivamente en la investigación correspondiente, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad para terceros durante esta fase.

Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones en la fase de investigación o proporcione copia de ellas o de los documentos, será responsable administrativamente. Sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir.

Las comunicaciones interceptadas conforme esta Ley y la información relacionada con el segundo párrafo del Artículo 24 de la Constitución Política de la República, deberán permanecer en estricta confidencialidad para terceros durante y después de todo el proceso penal.

No se considerarán terceros las autoridades competentes de otros países en materia de investigación penal, cuando se trate de operaciones coordinadas.

Artículo 15. Auditorias. A solicitud del Ministerio Público, al Juez competente, mediante resolución favorable se podrán realizar auditorias a personas individuales cuando existan indicios y justificación suficiente derivada de la investigación que hagan presumir fundadamente que son miembros de grupos delictivos organizados. Asimismo podrán ordenarse auditorias a organizaciones o instituciones sobre las que se tengan indicios suficientes que hagan presumir que están siendo utilizadas para el desarrollo de las actividades de organizaciones criminales.



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 16. Alcances de la investigación. En los procesos relativos a los delitos a que se refiere esta Ley, la investigación también deberá extenderse al descubrimiento de las estructuras, formas de operación y ámbitos de actuación de los grupos delictivos organizados.

Artículo 17. Reserva de las actuaciones. Mientras no exista persona ligada a proceso penal, no se tendrá acceso a las actuaciones realizadas por los agentes encubiertos, a las interceptaciones de comunicaciones y a las entregas vigiladas. Estas diligencias únicamente pueden ser conocidas por el juez contralor, los fiscales encargados del caso y quienes intervienen en la realización de las mismas.

Artículo 18. Pruebas anticipadas de testimonios. Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio o dictámenes periciales en contra de algún miembro de grupos delictivos organizados, los fiscales deberán gestionar la protección del testigo o perito conforme las disposiciones contenidas en la Ley para Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal y, deberán recibirse sus respectivos testimonios o informes en pruebas anticipadas ante juez contralor.

Artículo 19. Utilización conjunta de métodos especiales de investigación. Los agentes fiscales podrán solicitar y desarrollar conjuntamente o separadamente los métodos especiales de investigación previstos en la presente Ley.

TÍTULO TERCERO

MÉTODOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS

Artículo 20. Operaciones encubiertas. Se entenderá por operaciones encubiertas aquellas que realizan agentes encubiertos con la finalidad de obtener información o evidencias que permitan procesar a las personas que



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulación mediante el diseño de estrategias eficaces con estricto control judicial y administrativo.

Quedan prohibidas y excluidas de las operaciones encubiertas las que se hagan fuera de las acciones y planificaciones en la fase de investigación en contra de grupos u organizaciones criminales, que específicamente realicen los agentes encubiertos, con la debida autorización y supervisión del Ministerio Público, así mismo la provocación de delitos.

Artículo 21. Agentes encubiertos. Son agentes encubiertos los funcionarios policiales especiales que voluntariamente a solicitud del Ministerio Público se les designe una función con la finalidad de obtener evidencias o información que permitan descubrir y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados.

Los agentes encubiertos podrán asumir transitoriamente identidades y roles ficticios, actuar de modo secreto y omitir la realización de los procedimientos normales de su cargo ante la comisión de determinados delitos, específicamente en los casos asignados a ellos, con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de integrantes de dichas organizaciones.

Artículo 22. Facultades de los Agentes encubiertos. Para el objeto de la presente Ley, los agentes encubiertos estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del imputado o los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o transacciones.

Igualmente, si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la operación, información útil para los fines de la operación, lo hará saber al fiscal encargado de la investigación para que éste disponga el desarrollo de una operación especial, para la recopilación de la información y los elementos materiales o evidencia física encontrados.

Artículo 23. Análisis de organización criminal. Cuando el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de un grupo delictivo organizado, ordenará a la autoridad policial respectiva, que realice un análisis con el fin de lugares donde y con quien realizan sus operaciones y, si fuere posible, los puntos débiles de la misma.



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Posteriormente ordenará la planificación, preparación y manejo de una operación, para que agente o agentes encubiertos infiltren la organización criminal, con el fin de obtener información útil que sirva para lograr los objetivos establecidos en la presente Ley.

Artículo 24. Información inmediata. Los agentes encubiertos que tuvieren conocimiento de la futura comisión de delitos contra la vida, secuestro, desaparición forzada, genocidio, tortura, lesiones específicas, graves o gravísimas, delitos de violación y abusos deshonestos, deberá poner en conocimiento inmediato de las autoridades respectivas a efecto de evitar la comisión de los mismos.

Artículo 25. Autorización. A solicitud del Fiscal del Ministerio Público encargado del caso, el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público podrá autorizar operaciones encubiertas, por un tiempo máximo de seis meses, renovable cuantas veces sea necesario sin que el plazo total de la operación exceda de un año.

Artículo 26. Requisitos de la solicitud. La solicitud de la operación encubierta deberá hacerse por escrito y deberá contener:

- a. Descripción del hecho que se investiga indicando el o los posibles delitos en que se incurre.
- b. Antecedentes que permitan presumir que la operación encubierta facilitará la consecución de los objetivos que se persiguen por la presente Ley; la justificación del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema ordinario de investigación no logrará la obtención de la información necesaria.
- c. En términos generales, las actividades que el agente encubierto desarrollará para la obtención de la información y los métodos que se utilizarán para documentar la información recabada por los agentes encubiertos, de conformidad con el Artículo 21 de la presente Ley.
- d. La identidad ficticia que asumirá y las funciones de los agentes encubiertos que intervendrán en la operación; la identidad real será únicamente del conocimiento del fiscal encargado del caso.
- e. En plica cerrada la identidad real del agente encubierto, la que quedará al resguardo del Fiscal General de la República y Jefe del



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Ministerio Público sin que este pueda conocer el contenido, salvo caso necesario al darse por terminada la operación.

- f. Cuando se conozca, el nombre, sobrenombre o cualquier otra circunstancia que permita identificar a las personas o integrantes presuntamente vinculadas a la organización criminal o las operaciones ilícitas de las mismas.

Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público podrá requerir al solicitante elementos de juicio adicionales que respalden la solicitud.

Artículo 27. Resolución. Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público deberá conocer y resolver en forma inmediata la solicitud planteada por el fiscal. La resolución deberá ser fundada y en caso de autorizarse deberá contener los siguientes requisitos:

- a. La determinación de los agentes encubiertos que participarán en la operación.
- b. Indicación de las actividades generales que se autoriza realizar durante la operación encubierta y los métodos que se utilizarán para documentar la información que proporcionen los agentes encubiertos de conformidad con el artículo 21 de la presente Ley.
- c. El objeto y el plazo por el cual se autoriza la operación encubierta.
- d. La obligación del Fiscal de informar verbalmente cada treinta días al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público sobre el desarrollo de las actividades realizadas por los agentes encubiertos para verificar si la medida está cumpliendo con la finalidad perseguida y con las reglas establecidas en la presente Ley para la utilización de la medida.

Para el efecto, el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público convocará a una audiencia privada para que el agente fiscal a cargo del caso informe verbalmente sobre el avance de la investigación y la información recabada hasta el momento; podrá exigir en cualquier momento que se le exhiba la documentación y medios de prueba que respalden el informe.

La prohibición expresa de que los agentes encubiertos provoquen la comisión de delitos para lograr una eventual detención o procesamiento de cualquier persona.



Comisión de Gobernación

Congreso de la República

Guatemala, C. A.

Artículo 28. Comprobación de la información. Durante la operación encubierta los fiscales deberán documentar la información que reciban de forma verbal por los agentes encubiertos. Esta podrá obtenerse mediante seguimientos, vigilancias, grabaciones de voces de las personas investigadas, la utilización de micrófonos u otros mecanismos que permitan tal finalidad, fotografías, grabaciones de imágenes, u otros métodos técnico científicos que permitan verificar la información proporcionada por los agentes encubiertos.

Artículo 29. Responsabilidad del agente encubierto. Estará exento de responsabilidad penal, civil y administrativa, el agente encubierto que incurra en actividades ilícitas necesarias para el cumplimiento de su cometido, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

- a. Que su actuación cuente con autorización judicial previa.
- b. Que su actividad esté dentro de los lineamientos determinados por el Ministerio Público en el ejercicio de la dirección de la investigación.
- c. Que el agente encubierto informe periódicamente al fiscal encargado del caso y a sus superiores, sobre los actos y diligencias que realice y el resultado de los mismos.
- d. Que sus actividades no estén orientadas a ocultar, destruir o alterar evidencias de la actividad de la organización criminal, o a encubrir fallas en el operativo o en la actuación de sus superiores u otros agentes.
- e. Que el agente encubierto no motive, induzca o provoque la comisión delictiva de algún miembro de la organización criminal o de otras personas.
- f. Que las actividades no estén orientadas al lucro o beneficio personal del agente encubierto o de sus parientes dentro de los grados de ley;
- g. Que las actividades no consistan en hechos punibles de los previstos en el artículo 17 de la presente Ley.

Artículo 30. Sanción del agente encubierto. El agente encubierto que cometiere un delito que no este incluido dentro de los fines de la investigación, será sancionado con prisión de cinco (5) a ocho (8) años sin perjuicio de las penas de los delitos cometidos.

Artículo 31. Intervención de la defensa. A partir de la primera declaración, el imputado o su defensor podrá revisar el expediente que deberá contener la documentación de la información recabada durante la operación encubierta, con el objeto de constatar si en el procedimiento y en los actos realizados no



-000051-

Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

se vulneraron los derechos y garantías del imputado y, si se respetó el contenido de la presente Ley.

Artículo 32. Control de la operación. Los agentes fiscales serán los responsables de la dirección, desarrollo y documentación de la operación encubierta. Si detectaren desviaciones o abusos en el desarrollo de la operación por parte de los agentes encubiertos, deberán suspender inmediatamente la operación e informar al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público los motivos de la misma y, si fuere procedente, deberá formular la acusación respectiva para el procesamiento del agente encubierto.

Artículo 33. Control administrativo. El Ministro de Gobernación, es el superior jerárquico responsable de ejercer el control administrativo sobre el personal que desempeña funciones de agente encubierto quedando el control de la información e investigación con exclusividad al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público y al agente fiscal respectivo.

CAPITULO SEGUNDO

LAS ENTREGAS VIGILADAS

Artículo 34. Entregas vigiladas. Se entenderá por entrega vigilada el método de investigación que permite el transporte y tránsito de remesas ilícitas o sospechosas, así como de drogas o estupefacientes y otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilícito comercio, que ingresen, circulen o saigan del país, bajo la estricta vigilancia o seguimiento de autoridades previstas en la presente Ley.

Este método se utilizará con el fin de descubrir las vías de tránsito, el modo de entrada y salida del país, el sistema de distribución y comercialización, la obtención de elementos probatorios, la identificación y procesamiento de los organizadores, transportadores, compradores, protectores y demás partícipes de las actividades ilegales.

Artículo 35. Entregas vigiladas durante operaciones encubiertas. Durante el desarrollo de operaciones encubiertas el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, a requerimiento del agente fiscal encargado del caso podrá autorizar que uno o más agentes encubiertos pongan a circular dentro de organizaciones criminales y otras conexas, drogas o estupefacientes, así como otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilícito comercio, a efecto de descubrir el funcionamiento y operación de dichas organizaciones y



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

obtener la demás información que se persigue mediante la utilización de las entregas vigiladas. En ningún caso se podrá fundamentar una detención o procesamiento de alguna persona únicamente por la posesión o circulación de las sustancias u objetos entregados mediante esta operación.

Sólo se podrá detener a personas pertenecientes a organizaciones criminales y utilizar la información o evidencias recabadas en su contra, cuando los funcionarios a cargo de estas operaciones no hayan sembrado la idea de la comisión delictiva en el imputado.

Artículo 36. Personal especial. Las entregas vigiladas deberán ser realizadas por un equipo especial formado por personal de la Policía Nacional Civil, bajo la supervisión y dirección estricta del Ministerio Público, y serán periódicamente evaluados con métodos científicos para garantizar su idoneidad en el ejercicio de dichas actividades.

Artículo 37. Requisitos de la solicitud. Los agentes fiscales encargados del caso deberán solicitar por escrito ante el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público la autorización de la entrega vigilada, quien deberá resolver inmediatamente. Dicha solicitud deberá contener lo siguientes requisitos:

- a. Descripción del hecho que se investiga indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos.
- b. Los antecedentes que permitan presumir que la entrega vigilada facilitará la consecución de los objetivos que se persiguen por la presente Ley.
- c. La justificación del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema ordinario de investigación no logrará la obtención de la información necesaria;
- d. En términos generales, los métodos que se desarrollarán para documentar la información de la entrega vigilada, de conformidad con el artículo 21 de la presente Ley.
- e. Cuando proceda, el detalle de las sustancias, bienes u objetos de ilícito comercio que se pondrán a circulación, indicando con precisión las cantidades de los mismos, y la justificación de los resultados que se pretenden alcanzar. Cuando esto no sea posible porque dichas sustancias, bienes u objetos no serán puestos en circulación por agentes encubiertos, deberá indicarse en términos generales la clase de



Comisión de Gobernación

Congreso de la República

Guatemala, C. A.

sustancias o bienes que se dejarán circular para el alcance de los fines de la entrega vigilada.

Artículo 38. Competencia para la autorización. Será competente para la autorización de entregas vigiladas, el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.

Artículo 39. Resolución. El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, deberá dictar su resolución debidamente fundamentada, determinando los siguientes puntos:

- a. Descripción del hecho que se investiga.
- b. La justificación del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema *ordinario* de investigación no logrará la obtención de la información necesaria.
- c. En términos generales, los métodos que se autorizan para documentar la información de la entrega vigilada, de conformidad con el Artículo 21 de la presente Ley.
- d. Si las sustancias o bienes serán puestos en circulación por agentes encubiertos, deberá indicarse el detalle de las sustancias, bienes u objetos de ilícito comercio que se pondrán a circulación, indicando con precisión las cantidades y características de los mismos, y la justificación de los resultados que se pretenden alcanzar.
- e. Cuando las sustancias o bienes no sean puestos en circulación por agentes encubiertos, deberá indicarse en términos generales la clase de sustancias o bienes que se dejarán circular para el alcance de los fines de la entrega vigilada.

Artículo 40. Procedimiento antes de denegar la medida. Si de lo manifestado por el fiscal encargado del caso en su solicitud, el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público considera que no es viable la autorización de la entrega vigilada prevista en esta ley, por deficiencias en la solicitud, deberá comunicar inmediatamente al fiscal las fallas o deficiencias de que adolezca la misma a efecto de que éstas puedan ser subsanadas de forma inmediata o en un plazo no mayor a de veinticuatro horas. De no lograrse subsanar tales deficiencias, el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público dictará la resolución correspondiente con la debida fundamentación.



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 41. Dirección de la operación. Autorizada la entrega vigilada, el Fiscal responsable del caso deberá coordinar con el jefe de la unidad especial, la designación de los agentes que desarrollarán la entrega vigilada; quienes serán responsables de informar permanentemente al fiscal del avance de la operación para que éste pueda decidir las diligencias procesales pertinentes cuando lo estime necesario.

Artículo 42. Comprobación de la información. Durante la operación de entrega vigilada los agentes que intervengan en la misma, bajo la dirección del fiscal, deberán documentar la entrega vigilada, mediante grabaciones de voces, utilización de micrófonos, fotografías, grabaciones de imágenes, u otros métodos técnico – científicos que permitan garantizar el debido control de la operación. La información documentada deberá ser puesta a disposición del fiscal encargado del caso inmediatamente.

Artículo 43. Informe operacional. Dentro de los tres días de haber concluido la entrega vigilada el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, deberá ser informado por el fiscal encargado del caso sobre los resultados de dicha operación, en especial, sobre la existencia y paradero de las sustancias, bienes u objetos ilícitos, que se dejaron circular.

Artículo 44. Documentos provenientes del extranjero. Para la autorización de entregas vigiladas de sustancias, bienes u objetos de ilícito comercio provenientes de otros países, las autoridades del país requirente o el país de destino final de las mismas, deberán suministrar al Ministerio Público la información necesaria para que el fiscal designado pueda fundamentar solicitud para efectos de la autorización respectiva.

Artículo 45. De la cadena de custodia. Cuando haya concluido la entrega vigilada y se hayan incautado sustancias, bienes u objetos de ilícito comercio, los agentes encargados de la operación, bajo la dirección del fiscal responsable del caso, deberán asegurar la cadena de custodia para garantizar que las evidencias obtenidas llenen los requisitos para ser incorporadas en el proceso.

Artículo 46. Cesación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas. El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público podrá resolver en cualquier momento la cesación de las operaciones encubiertas o del procedimiento de entrega vigilada, la detención de los partícipes en el hecho ilícito y la incautación de las sustancias y de los instrumentos del delito, poniéndolos a disposición del juez competente, si a su criterio:

1. La operación pone en serio peligro la vida o la integridad física del algún agente encubierto u otras personas ajenas a los actos ilícitos de la organización criminal.



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

2. La operación obstaculiza o impide la comprobación de los ilícitos investigados.
3. La operación facilita a los partícipes eludir la acción de la justicia.
4. La operación se desvía de finalidad o evidencia en sus ejecutores, abusos, negligencia, imprudencia o impericia.
5. Han cambiado o desaparecido los presupuestos de hecho que sustenten la conveniencia de seguir aplicando la modalidad de las operaciones encubiertas o las de entregas vigiladas.
6. La operación haya violado un precepto constitucional.

CAPITULO TERCERO
INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS Y OTROS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Artículo 47. Interceptaciones. Cuando sea necesario evitar, interrumpir o investigar la comisión de delitos cometidos por grupos delictivos organizados, podrá interceptarse, grabarse y reproducirse, con autorización judicial, comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético, así como cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro existan.

Artículo 48. Competencia para la solicitud. Los fiscales del Ministerio Público son los únicos competentes ante el juez correspondiente, para la solicitud de autorización de la interceptación de las comunicaciones mencionadas en el artículo anterior, cuando la situación lo haga conveniente. Cuando el órgano policial tenga conocimiento de la comisión o planificación de la comisión de delitos por grupos delictivos organizados, deberán acudir inmediatamente al Ministerio Público proporcionando toda la información necesaria para fundamentar la solicitud de la interceptación de dichas comunicaciones.

Artículo 49. Requisitos de la solicitud de autorización. Las solicitudes de autorización para la interceptación de las comunicaciones reguladas en la presente Ley, deberán presentarse por escrito ante el juez competente con los siguientes requisitos:



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

- a. Descripción del hecho que se investiga, indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos.
- b. Números de teléfonos, frecuencias, direcciones electrónicas, según corresponda, o cualesquiera otros datos que sean útiles para determinar el medio electrónico o informático que se pretende interceptar para la escucha, grabación o reproducción de la comunicación respectiva.
- c. Descripción de las diligencias y medios de investigación que hasta el momento se hayan realizado.
- d. Justificación del uso de esta medida, fundamentando su necesidad e idoneidad.
- e. Si se tuvieran, nombres y otros datos que permitan identificar a la persona o personas que serán afectadas con la medida.

En los delitos en que este en peligro la vida o la libertad personal, el ministerio público podrá presentar verbalmente la solicitud al juez competente quien resolverá en forma inmediata.

Artículo 50. Necesidad e idoneidad de la medida. Se entenderá que existe necesidad de la interceptación de las comunicaciones cuando, los medios de investigación realizados demuestren que en los delitos cometidos por miembros de grupos delictivos organizados se estén utilizando los medios de comunicación establecidos en la presente Ley. Asimismo, se entenderá que existe idoneidad del uso de la interceptación de las comunicaciones cuando, atendiendo a la naturaleza del delito, se puede determinar que la interceptación de las comunicaciones es eficaz para obtener elementos de investigación que permitan evitar, interrumpir o esclarecer la comisión de los delitos ejecutados por miembros de grupos delictivos organizados.

Artículo 51. Competencia para la autorización. Serán competentes para la autorización de interceptación de las comunicaciones reguladas en Artículo 38 de la presente Ley, los Jueces de Primera Instancia del ramo Penal, correspondiente a la circunscripción territorial donde se haya cometido, se esté cometiendo o se esté planificando la comisión de delitos por miembros de grupos delictivos organizados.

Cuando la comisión del delito se haya realizado o se esté planificando cometer en distintos lugares, cualquiera de los Jueces de Primera Instancia del ramo Penal, de dichos lugares deberá conocer de las solicitudes de interceptación de estas comunicaciones.



Comisión de Gobernación

Congreso de la República

Guatemala, C. A.

Cuando por razón de horario o cualquier otro motivo no fuere posible que los Jueces de Primera Instancia del ramo Penal conozcan de forma inmediata la solicitud de interceptación, podrá presentarse la misma ante el Juez de Paz correspondiente conforme los criterios de los dos párrafos anteriores. En este caso, el Juez de Paz deberá resolver de forma inmediata y enviar las actuaciones a la primera hora hábil del día siguiente al Juez de Primera Instancia jurisdiccional competente para que, en término máximo de tres días, ratifique, modifique o revoque la decisión adoptada por el Juez de Paz.

Artículo 52. Autorización de la interceptación. El Juez competente deberá resolver inmediatamente las solicitudes de interceptaciones previstas en esta ley, siendo responsable por la demora injustificada en la resolución de las mismas. El auto que resuelva este tipo de solicitudes, además de los requisitos formales de un auto judicial, deberá contener los siguientes:

- a. Justificación del uso de esta medida indicando los motivos por los que autoriza o deniega la solicitud de interceptación.
- b. Definición del hecho que se investiga o se pretende evitar o interrumpir, indicando él o los delitos en que se encuadran los mismos.
- c. Números de teléfonos, frecuencias, direcciones electrónicas, según corresponda, o cualesquiera otros datos que sean útiles para determinar el medio electrónico o informático que se autoriza interceptar.
- d. Plazo por el que autoriza la interceptación. La autorización tendrá una duración máxima de treinta días, la cual podrá prorrogarse de conformidad con la presente Ley.
- e. Nombres y otros datos que permitan identificar a la persona o personas que serán afectadas con la medida, en caso éstos hayan sido proporcionados por el órgano requirente.
- f. La fecha y hora para la audiencia de revisión del informe al que se refiere el Artículo 51 de la presente Ley.

El fiscal encargado del caso deberá cesar inmediatamente la interceptación cuando concurra cualquier de los supuestos establecidos en el Artículo 38 de la presente Ley y será responsable de conformidad con la ley.

Artículo 53. Procedimiento antes de denegar la medida. Si de lo manifestado por el fiscal en su solicitud, el juez competente considera que no es viable la autorización de la interceptación de las comunicaciones previstas en esta ley, por deficiencias en la solicitud, deberá comunicar inmediatamente al fiscal las fallas o deficiencias de que adolezca la misma a efecto de que éstas puedan ser subsanadas de forma inmediata o en un plazo no mayor de



Comisión de Gobernación

Congreso de la República

Guatemala, C. A.

veinticuatro horas. De no lograrse subsanar tales deficiencias, el juez dictará la resolución correspondiente con la debida fundamentación.

Artículo 54. Competencia para la interceptación. La interceptación, grabación y reproducción de las comunicaciones a las que se refiere el Artículo 38 de esta Ley, será realizada por personal especializado de la Policía Nacional Civil, quienes serán periódicamente evaluados con métodos científicos para garantizar su idoneidad en el ejercicio de dichas actividades.

Para tal efecto, el Ministro de Gobernación deberá conformar un equipo especial de técnicos que serán destinados exclusivamente para la realización de dichas funciones.

Artículo 55. Terminales de consulta. El Ministerio Público deberá organizar las unidades de terminales de consultas donde se realizarán las interceptaciones, grabaciones y reproducciones de las comunicaciones previstas en la presente Ley, las cuales deberán ser estrictamente reglamentadas a efecto de que, de toda actividad realizada en dichas unidades, quede registro informático y electrónico para el efectivo control del respeto a las garantías y el apego a la legalidad de quienes intervengan en ellas. Para el efecto todas las empresas prestadoras de servicios de comunicación telefónica, informática u otras de naturaleza electrónica, deberán de colaborar con el Ministerio Público con el equipo necesario para el desarrollo de las interceptaciones de las comunicaciones brindadas por sus servicios.

Artículo 56. Control judicial de las interceptaciones. Los jueces de primera instancia del ramo penal que hayan autorizado las interceptaciones de las comunicaciones previstas en esta Ley, deberán acudir a verificar que los procedimientos se estén desarrollando de conformidad con la presente Ley y que no se estén desarrollando interceptaciones, grabaciones ó reproducciones de comunicaciones no autorizadas, dicho control deberá realizarlo personalmente por lo menos una vez dentro del período autorizado, levantando acta de dicha visita.

Artículo 57. Duración de la medida. La autorización de la medida de interceptación expirará una vez se cumpla el plazo autorizado por el juez, salvo que se solicite la prórroga por el fiscal responsable de la investigación. En este caso, deberá justificarse la necesidad e idoneidad de continuar con dicha actividad de conformidad con los criterios establecidos en el Artículo 41 de la presente Ley.



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Podrá asimismo terminarse la medida cuando se logre el objetivo para la cual ha sido expedida la autorización de interceptación.

Artículo 58. Informes sobre las interceptaciones. En el mismo momento en que se autorice la medida de interceptación, el Juez competente deberá establecer la obligación del fiscal a informar cada quince días sobre el desarrollo de la actividad de interceptación, grabación y reproducción de las comunicaciones para verificar si la medida está cumpliendo con la finalidad perseguida y si se está cumpliendo con las reglas establecidas en la presente Ley para la utilización de la medida.

La omisión por el fiscal de la presentación de este informe verbal o escrito, o si sus explicaciones no fueren satisfactorias para el juez, podrán ser motivo suficiente para revocar la autorización y ordenar la suspensión de la interceptación.

Artículo 59. Transcripción de las grabaciones. El fiscal y sus investigadores deberán levantar acta detallada de la transcripción de las comunicaciones útiles y relevantes para la comprobación o aportación de evidencias del hecho punible que se investiga, tomando en cuenta que cualquier otra información personal o íntima, será excluida del informe certificado que se aporte como prueba del crimen o delito. El Ministerio Público conservará los originales de las transcripciones así como el o los cassettes sin editar que contienen las voces grabadas, hasta que se solicite la recepción de la primera declaración de la persona sindicada, momento en el que deberá poner a disposición del juez competente las actuaciones que obren en su poder. Una vez terminada la audiencia de la primera declaración, las actuaciones originales volverán a poder del Ministerio Público para completar la etapa preparatoria del proceso penal.

Las comunicaciones, informaciones, mensajes, datos o sonidos transmitidos en un idioma que no sea el español, serán traducidas a este idioma por un intérprete autorizado por el juez contralor. En todos los casos, las traducciones se ejecutarán previo juramento de realizar versiones fieles, conforme a lo dicho por el investigado.

El medio de prueba será las grabaciones o resultados directos de las interceptaciones, y las transcripciones servirán únicamente como guías para una correcta comprensión de las mismas. En caso de contradicción, prevalecerá lo primero sobre las transcripciones.



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 60. Derecho de defensa. El resultado final de las grabaciones deberá tener como único objetivo la sustanciación del procedimiento que impulse el Fiscal en contra de la persona a quien va dirigida la interceptación de su comunicación. Para garantizar el derecho de defensa, las grabaciones podrán ser revisadas por la persona que ha sido objeto o blanco de ellas, a partir de la primera declaración de dicha persona en los tribunales penales correspondientes.

Artículo 61. Violación a las formalidades de la interceptación. El contenido de las grabaciones realizadas de conformidad con el Artículo 38 de esta ley, sólo tendrá validez como medio de prueba cuando sea el resultado de una interceptación autorizada de conformidad con el procedimiento establecido en la presente Ley. La prueba obtenida con violación de estas formalidades o la violación al derecho a la privacidad más allá de lo establecido por la autorización judicial es ilegal, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que incurra la persona que la realiza.

Artículo 62. Hallazgo inevitable. Cuando a consecuencia de una medida de interceptación autorizada conforme la presente Ley, resultare información de hechos delictivos del investigado o de un tercero no previstos en la autorización judicial, el Fiscal deberá ponerlo en conocimiento inmediato del juez contralor, a efecto de solicitar una nueva autorización con respecto a los nuevos hechos descubiertos.

Artículo 63. Registro, conservación y archivo de la decisión judicial. Los jueces de primera instancia del ramo, llevarán un libro de registro de todas las solicitudes presentadas a su consideración, indicando la fecha y hora en que fueron recibidas, el número de la solicitud y el nombre del representante del Ministerio Público que la presenta. Únicamente al fiscal encargado del caso se le entregará copia de la solicitud y de la decisión judicial. A ninguna entidad o persona se le debe suministrar información relacionada con las actuaciones de interceptaciones reguladas en la presente Ley.

Artículo 64. Destrucción de archivos. Los registros y actas en los cuales consten las interceptaciones de las comunicaciones establecidas en la presente Ley, hayan dado o no resultados, deberán ser destruidos bajo supervisión judicial, un año después de finalizada la persecución penal o la sentencia impuesta haya sido ejecutoriada en el caso que existen personas condenadas. La destrucción a la que se refiere el presente artículo, no incluye el expediente del proceso penal que haya fenecido.



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 65. Solicitud de prórroga. El Ministerio Público solicitará la prórroga del periodo de la interceptación de las comunicaciones por lo menos con dos días de anticipación a la fecha en que fenezca el periodo anterior. El juez resolverá inmediatamente con base en el informe que se le hubiere presentado.

Cuando se hubiere denegado la prórroga, el fiscal encargado del caso deberá concluir la interceptación autorizada, debiendo levantar acta y rendir informe complementario al juez competente.

Artículo 66. Término de la interceptación. Cuando hubiere concluido toda interceptación de comunicaciones, el fiscal encargado del caso informará al juez competente sobre su desarrollo y sus resultados, debiendo levantar el acta respectiva para efectos de dicho informe.

Artículo 67. Forma de hacer constar el resultado de la interceptación. El fiscal encargado del caso levantará acta circunstanciada de toda interceptación realizada que contendrá las fechas de inicio y término de la misma; un inventario detallado de los documentos, objetos, cintas de audio y cualquier otro medio utilizado de conformidad con la presente Ley, que contengan los sonidos captados durante la misma; la identificación de quienes hayan participado en las diligencias, así como los demás datos que considere relevantes para la investigación.

Artículo 68. Cadena de custodia de las interceptaciones. Los documentos, objetos, cintas y cualquier otro registro obtenido en las interceptaciones, se numerarán en original y en duplicado de forma progresiva y contendrán los datos necesarios para su identificación. Se guardarán en sobre sellado para conservar la cadena de custodia de la prueba y el Fiscal encargado del caso será responsable de su seguridad, cuidado e integridad, debiendo dejar constancia de todo acto que realiza.

Artículo 69. Obligaciones de quienes participan en una intervención telefónica. Quienes participen en alguna intervención de comunicaciones privadas deberán guardar reserva sobre el contenido de las mismas.

Artículo 70. Cotejo de las voces provenientes de una comunicación interceptada. Las voces provenientes de una comunicación interceptada contra el imputado podrán ser cotejadas por los medios idóneos para ser incorporados en el proceso penal como evidencias o medios de prueba.

*Comisión de Gobernación**Congreso de la República**Guatemala, C. A.***CAPITULO CUARTO
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PUBLICOS**

Artículo 71. Los funcionarios o empleados públicos que participen en alguna fase de los métodos especiales de investigación a que se refiere este título, que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas en el curso del mismo, serán sancionados con prisión de dos a seis años, así como con la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública, por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta.

La misma pena se impondrá a quienes con motivo de su empleo, cargo o comisión pública tengan conocimiento de la existencia de una solicitud o autorización de los métodos antes descritos y revelen su existencia o contenido.

**TÍTULO CUARTO
DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS****CAPÍTULO PRIMERO
MEDIDAS PRECAUTORIAS**

Artículo 72. Cuando se persiga penalmente a personas pertenecientes a grupos delictivos organizados, adicionalmente a lo establecido en el Código Procesal Penal, podrán utilizarse las siguientes medidas:

1. Arraigo.
2. Secuestro y embargo de bienes.
3. Inmovilización de cuentas bancarias y bienes inmuebles.
4. El secuestro de libros y registros contables.
5. Suspensión de las patentes y permisos que hayan sido debidamente extendidas y que hubieren sido utilizadas de cualquier forma para la comisión del hecho ilícito.
6. Medidas cautelares de bienes susceptibles de comiso;
 - a. Incautación
 - b. Ocupación.

Artículo 73. Secuestro y embargo de Bienes. Podrá ordenarse el secuestro y embargo de los bienes de las personas sindicadas pertenecientes a grupos delictivos organizados, sean producto directo del delito o de la transformación o conversión en otros bienes.



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

También se podrá ordenar el secuestro y embargo de los bienes a que se refiere el párrafo anterior, cuando estos aparezcan registrados a nombre de terceras personas

Artículo 74. Disposición de los bienes incautados producto de la actividad delictiva. Los bienes secuestrados en procesos por delitos cometidos por grupos delictivos organizados, después de dictada la sentencia y que la misma contemple el comiso de los bienes secuestrados, la Corte Suprema podrá acordar el destino de los bienes para uso de las autoridades encargadas de prevenir, controlar, investigar y perseguir dichos delitos.

Artículo 75. Restitución de los bienes.. La víctima podrá solicitar que se le restituyan sus bienes secuestrados o embargados, producto de la actividad delictiva en los procesos instruidos por delitos cometidos por grupos delictivos organizados, siempre que acredite que se le despojo de sus bienes en la comisión de la actividad ilícita.

Artículo 76. Devolución de bienes. El Juez o tribunal del caso, podrá disponer la devolución durante el proceso, al reclamante de los bienes productos, o instrumentos de uso no prohibido o de lícito comercio, cuando se haya acreditado y concluido en la vía incidental que:

- a) El reclamante tiene legítimo derecho respecto de dichos bienes, productos o instrumentos;
- b) El reclamante no este señalado como autor o participe de ningún tipo de delito relacionado con algún grupo delictivo organizado;
- c) El reclamante no adquirió derecho alguno de los bienes productos o instrumentos de la persona procesada, en circunstancias que llevarán razonablemente a concluir, que el derecho sobre aquellos le fue transferido para evitar una eventual persecución penal y comiso posterior de los mismos;
- d) El reclamante hizo las gestiones que estaban a su alcance para impedir el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos.

Antes de hacer efectiva la devolución, el fiscal deberá efectuar todas las diligencias necesarias para asegurar las pruebas.

Si el juez hubiera acordado la devolución con carácter de deposito, el reclamante deberá de exhibir dichos bienes, productos o instrumentos cuando así se lo solicite el Juez, tribunal competente o el Ministerio Público.



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 77. Inmovilización de cuentas bancarias. Podrán inmovilizarse, investigarse o tener acceso a las cuentas bancarias del sindicado o de las personas que se hayan beneficiado directa o indirectamente por los delitos cometidos por aquellos. El fiscal hará la solicitud al juez contralor de la investigación,

Artículo 78. Inmovilización de bienes inmuebles y muebles registrables. Cuando la evidencia recabada por el Ministerio Público sea clara en cuanto a que se presume fundadamente que los bienes inmuebles o muebles registrables, de una persona que pertenece a grupos delictivos organizados, están en peligro de ocultarse, desaparecer o simularse actos traslativos de dominio sobre los mismos, el Ministerio Público solicitará la autorización judicial de inmovilización de bienes inmuebles o muebles registrables, para que los mismos no puedan disponerse, simularse o gravarse por el investigado.

Artículo 79. Inmovilización de bienes inmuebles o muebles registrables, propiedad de terceros. Se podrán inmovilizar mediante autorización judicial bienes inmuebles o muebles registrables que sean propiedad de terceros, cuando exista clara evidencia que estas personas se hayan beneficiado directa o indirectamente con el producto del delito cometido por algún miembro de un grupo delictivo organizado.

Artículo 80. Secuestro de libros y registros contables. Se podrá proceder al secuestro de libros y registros contables, mediante resolución firme dictada por juez competente, siempre que existan motivos que resulten indispensables para asegurar fuentes de prueba pertinentes al objeto de la investigación.

Artículo 81. La suspensión provisional de las inscripciones de las personas jurídicas. Se podrán suspender provisionalmente con autorización judicial durante la substanciación del proceso penal, las inscripciones de personas jurídicas, sus patentes, permisos y licencias que hayan sido extendidas legalmente, cuando hubieren sido utilizadas para cometer en cualquier forma un hecho ilícito de los establecidos en la presente Ley.

Artículo 82. Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso que se hayan obtenido en forma flagrante. Cuando exista flagrancia en la comisión de un hecho delictivo y se encuentren bienes relacionados con la actividad criminal que pueden ser objeto de comiso, en caso de peligro por la demora el fiscal podrá ordenar el secuestro debiendo solicitar la autorización

P'



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

judicial inmediatamente, consignando las cosas o documentos ante el tribunal competente, las cosas o documentos serán devueltos si el tribunal no autoriza su secuestro.

CAPÍTULO SEGUNDO
DISPOSICIONES GENERALES DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS

Artículo 83. Solicitud. En los casos en que se debe solicitar la autorización o convalidación de las medidas precautorias, el fiscal deberá presentar solicitud fundamentando la necesidad de la medida, acompañando copia de los elementos de convicción que la justifiquen para el éxito de la investigación. El fiscal debe indicar el término de duración de la medida solicitada y las especificaciones necesarias para concretarlas; en ningún caso la medida podrá exceder del plazo de un año.

Artículo 84. Resolución. El Juez se pronunciará inmediatamente mediante resolución motivada, acerca de la procedencia e improcedencia o la convalidación de la medida. En caso que el Juez no convalide la actuación del fiscal, deberá dejar sin efecto lo actuado, indicando expresamente la prohibición de utilizar la información obtenida en el proceso penal.

Artículo 85. Ejecución de la medida. Ejecutada la medida el juez notificará al afectado la resolución que ordena la misma, quien podrá manifestar su inconformidad en la vía de los incidentes.

Artículo 86. Remisión de información. Las instituciones públicas y privadas están obligadas a remitir la información que les sea requerida por la autoridad competente en el marco de la presente Ley. En caso de negativa injustificada, sin perjuicio de las acciones legales contra quien desobedece la solicitud, se autorizará el secuestro de dicha información, así como los registros manuales o informáticos que posean tales entidades.

CAPÍTULO TERCERO

**PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN DEL
DERECHO DE PROPIEDAD, SOBRE BIENES PRODUCTO DE
ACTIVIDADES ILICITAS COMETIDAS POR GRUPOS DELICTIVOS
ORGANIZADOS**



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 87. Forma de extinción del derecho de propiedad o posesión. Para los efectos de la presente Ley, el derecho de propiedad o posesión sobre bienes producto de actividades ilícitas cometidas por grupos delictivos organizados, se extingue por:

- a) Restitución a la víctima, en los términos establecidos en el artículo 66 de la presente Ley.
- b) Comiso, los que pasarán a formar parte de los fondos privativos del Organismo Judicial.

Artículo 88. Comiso. Cuando los bienes producto del delito sean de ilícito comercio o de ilícita procedencia, el Ministerio Público podrá solicitar por vía incidental la extinción del derecho de propiedad o la posesión de los mismos por medio del comiso, a partir de que exista auto de procesamiento.

TÍTULO QUINTO
DE LOS COLABORADORES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA COLABORACIÓN EN LA PERSECUCIÓN PENAL DE LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA

Artículo 89. Derecho penal premial. El integrante del grupo delictivo organizado que preste ayuda o colaboración eficaz para la investigación y persecución de otros miembros de la misma, podrá recibir los beneficios otorgados en la presente Ley.

Artículo 90. Ámbito de la colaboración eficaz. Se considera colaboración eficaz, la información que proporcione el colaborador que permita cualquiera de los resultados siguientes:

- a) Evitar la continuidad y consumación de delitos o disminuir su magnitud;
- b) Conocer las circunstancias en que se planificó y ejecutó el delito, o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando;
- c) Identificar a los autores o partícipes de un delito cometido o por cometerse; o a los jefes, cabecillas o directores de la organización criminal;
- d) Identificar a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento, que permita desarticularla, menguarla o detener a uno o varios de sus miembros;



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

- e) Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, efectos y ganancias del delito, así como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones criminales;
- f) La entrega de los instrumentos, efectos, ganancias o bienes producto de la actividad ilícita a las autoridades competentes.

Artículo 91. Beneficios por colaboración eficaz. Salvo los delitos a los que se refiere el artículo 17 de la presente Ley, se podrán otorgar los siguientes beneficios por colaboración eficaz:

- a) El criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal regulados en el Código Procesal Penal, a quienes de conformidad con el Código Penal son autores; así como al autor del delito de encubrimiento;
- b) La no persecución penal o el sobreseimiento del ya iniciado a los que de conformidad con el Código Penal son cómplices;
- c) La rebaja de la pena en dos terceras parte a quien se encuentre cumpliendo condena, o la extinción de la misma cuando la rebaja en dos terceras partes haga efectiva el cumplimiento de la pena.

El beneficio regulado en la literal a) del presente, no se otorgará a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales.

Artículo 92. Beneficios para otros cómplices. Para los delitos establecidos en el artículo 17 de la presente Ley, se podrá otorgar los beneficios establecidos en la literal a) y c) del artículo anterior a los que de conformidad con el Código Penal son cómplices.

Artículo 93. Parámetros para otorgar beneficios. Para otorgar los beneficios descritos en el artículo anterior, se tendrá en consideración el grado de eficacia o importancia de la colaboración, en concordancia con la entidad y el grado de responsabilidad en el delito. Adicionalmente, el colaborador deberá entregar todos aquellos bienes, ganancias y productos que hubiere obtenido como consecuencia de su actividad ilícita en la organización criminal.

Artículo 94. Condiciones del beneficio otorgado. Los beneficios establecidos en la presente Ley, se otorgarán bajo condición de que el colaborador no cometa delito doloso, por un tiempo no menor del doble de la pena máxima que establece la ley por el delito que se le sinde o hubiera cometido, por habersele otorgado tal beneficio. En consecuencia si reincidiera en tal actividad, se revocará el beneficio otorgado al colaborador beneficiado.



Comisión de Gobernación

Congreso de la República

Guatemala, C. A.

Artículo 95. Celebración de acuerdo con los beneficiados. Los fiscales podrán solicitar al juez competente la celebración de acuerdos para otorgar los beneficios descritos anteriormente, con las personas investigadas, procesadas o condenadas, observando las reglas establecidas en el artículo 82 y 83 de la presente Ley. Con esta finalidad, los fiscales durante la investigación o en cualquiera etapa del proceso, podrán celebrar reuniones con los colaboradores, cuando no exista algún impedimento u orden de detención contra ellos.

Artículo 96. Diligencias previas a la celebración del acuerdo. Como consecuencia de las entrevistas que lleve a cabo, el fiscal dispondrá los actos de investigación necesarios para corroborar la información proporcionada, pudiendo ordenar a la Policía Nacional Civil que realice las pesquisas previas y rinda un informe al fiscal que la ordenó. Mientras se corrobore la información que ha sido proporcionada, el fiscal deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal del colaborador.

Artículo 97. Elaboración y contenido del acta del acuerdo de colaboración. Culminados los actos de investigación que corroboren la información proporcionada, el fiscal en caso que considere procedente solicitará al juez competente, la concesión de algún beneficio previsto en la presente Ley el cual deberá contener lo siguiente:

- a) El beneficio otorgado;
- b) La información proporcionada por el colaborador y las averiguaciones o pesquisas que hayan corroborado dicha información;
- c) En caso de ser necesario, las medidas personales para garantizar la seguridad del colaborador;
- d) El compromiso de la persona de seguir colaborando durante el desarrollo del proceso penal; en el entendido que ello no implica una disminución a su derecho de no declarar contra sí mismo.
- e) Las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiada.

Artículo 98. Denegación del acuerdo. En caso de no corroborarse la información proporcionada, el fiscal negará el beneficio y el acuerdo a la persona interesada, sin perjuicio de continuar con la investigación respectiva.

Artículo 99. Inicio de la persecución penal. Si de la información proporcionada se establecen indicios razonables de participación delictiva de las personas señaladas por el colaborador, el fiscal deberá proceder conforme a un plan previamente diseñado a iniciar la persecución penal en contra de las mismas.



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 100. Resolución judicial sobre el acuerdo de colaboración. El acuerdo que contenga el beneficio y los demás requisitos establecidos en el artículo 83 de la presente Ley, deberá ser aprobado por el juez contralor respectivo. Al resolver el acuerdo presentado, el juez podrá hacer las modificaciones pertinentes para adecuar el beneficio a las obligaciones a imponer, de acuerdo a la naturaleza y modalidad del hecho punible.

En caso que la resolución fuere denegada, el fiscal podrá apelarla conforme el procedimiento que establece el Código Procesal Penal.

Artículo 101. Obligaciones a imponer al colaborador eficaz. Cuando se concedan los beneficios previstos en la presente Ley, se impondrá al beneficiado una o varias de las siguientes obligaciones:

- a) presentarse periódicamente ante las autoridades competentes.
- b) Reparar los daños ocasionados por los ilícitos cometidos de acuerdo a su capacidad económica;
- c) No acudir a determinados lugares o visitar determinadas personas;
- d) Prohibición de portar armas de fuego, salvo que el fiscal lo considere necesario por su propia seguridad;
- e) En caso de ser necesario adoptar alguna identidad distinta que permita una mejor colaboración;
- f) Devolver los bienes producto de la actividad ilícita;
- g) No salir de determinada circunscripción territorial sin previa autorización judicial.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Artículo 102. Personas destinatarias de las medidas de protección. Las medidas de protección previstas en la presente Ley, son aplicables a quienes en calidad de colaboradores intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley.



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 103. Medidas de protección. El fiscal podrá establecer según el grado de riesgo o peligro existente, las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad del protegido y la de sus familiares, su residencia, profesión, lugar de trabajo, pudiendo adoptar las siguientes:

1. Protección policial en su residencia o su perímetro, así como la de sus familiares que puedan verse en riesgo o peligro, esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultación de su paradero;
2. Preservar su lugar de residencia y la de sus familiares;
3. Previo a la primera declaración del imputado, preservar u ocultar la identidad del beneficiario y demás datos personales;
4. Después de la sentencia y siempre que exista riesgo o peligro para la vida, integridad física o libertad del beneficiado o la de sus familiares, se podrá facilitar su salida del país con una condición migratoria que les permita ocuparse laboralmente.

CAPÍTULO TERCERO
PENAS

Artículo 104. Cómputo final. A los beneficiados por colaboración eficaz que hayan sido condenados o se encuentren cumpliendo pena de prisión, se les deberá realizar el cómputo de la pena, tomando en cuenta las rebajas establecidas en el artículo 83 de la presente Ley.

TÍTULO SEXTO
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
CAPÍTULO UNICO
IMPUGNACIONES

Artículo 105. Normas aplicables a la presente Ley. En materia de impugnaciones, son aplicables a la presente Ley, los recursos contenidos en el libro tercero del Código Procesal Penal.

Artículo 106. Recurso de apelación. No obstante lo dispuesto en el Artículo 404 del Código Procesal Penal, para los efectos de la presente Ley son apelables los autos que denieguen o autoricen:

- a) Interceptaciones de comunicaciones;
- b) Medidas precautorias;
- c) Así como el auto que aprueba o no el acuerdo de colaboración eficaz.



Comisión de Gobernación
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 107. Normas aplicables a las impugnaciones. Para el planteamiento del recurso de apelación establecido en la presente Ley, son aplicables las normas establecidas en los artículos del Código Procesal Penal que regulan dicho recurso.

TITULO SEPTIMO
DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 108. Supletoriedad. Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Código Penal, Código Procesal Penal, Ley del Organismo Judicial, así como las comprendidas en leyes especiales.

Artículo 109. Derogatorias. Quedan derogadas todas las leyes o disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Artículo 110. Reglamentos. El Organismo Ejecutivo deberá emitir los reglamentos a la presente ley en un plazo que no exceda de noventa días contados a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 111. Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

DIPUTADOS PONENTES

DIPUTADO SERGIO CAMARGO MURALLES

DIPUTADO OLIVERIO GARCÍA RODAS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G.', is written over a large, stylized checkmark or 'Z' shape.